

Aportes de la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas para las Cumbres de las Américas (CAPD) (Coalición N° 5)

Corrupción y Desarrollo Sostenible es un tema de gran preocupación para las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos sobre políticas de drogas desde una perspectiva de salud, derechos humanos y desarrollo.

La corrupción, al incentivar la falta de transparencia e impedir la participación de diversos sectores de la sociedad en la planificación e implementación de políticas nacionales y regionales, afecta el desarrollo sostenible y el acceso de la población a sus derechos, convirtiéndose en un obstáculo para el crecimiento. Esta problemática se refleja claramente en el modelo actual de las políticas de drogas, cuyo éxito es seriamente cuestionado y que establece una alianza espúrea entre Estado y narcotráfico. En este sentido, al declarar la producción, tráfico y consumo de algunas drogas como una actividad ilegal, los Estados desempeñaron un papel en el surgimiento del narcotráfico, cuyo poder y alcance no puede entenderse sin cierta protección del Estado, que tiene como base la corrupción.

En esta Octava Cumbre de las Américas la agenda de los presidentes del continente no debe de omitir debatir las políticas de drogas, pues las mismas constituyen un problema de desarrollo que debe ser seriamente atendido por los Estados. Hacemos un llamado a los mandatarios de la región a revisar las consecuencias negativas que la guerra contra las drogas ha tenido sobre el desarrollo sostenible del pueblo de las Américas y el ejercicio y goce de los derechos humanos. Instamos a tomar en consideración las siguientes propuestas:

- **Poner fin a las políticas punitivas de drogas y el consecuente aumento de violencia en el continente:** entre los objetivos de desarrollo sostenible se encuentra la reducción sustancial de todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, exhortando a los gobiernos y las comunidades a encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. Como es ampliamente conocido, una consecuencia de la guerra contra las drogas ha sido el aumento de la violencia, alimentando los conflictos armados existentes. Países donde el comercio de droga se ha reunido con una militarizada política de drogas a menudo han experimentado un aumento en las tasas de mortalidad por homicidios y otros crímenes, incluida la extorsión y el secuestro, que organizaciones delictivas usan como fuentes de ingresos.
- **Desarrollar y adoptar medidas alternativas a la condena o el castigo por delitos menores y/o no violentos relacionados con drogas y poner énfasis en la persecución de organizaciones de tráfico de drogas:** las deficientes políticas adoptadas por los Estados en la materia han llevado a la vulneración de los derechos humanos de los eslabones más débiles de la cadena del tráfico ilícito de drogas. En esta dirección, personas que usan drogas, mujeres, jóvenes, pobres, minorías étnicas y raciales suelen estar sujetas a detenciones arbitrarias, a menudo por ofensas menores de drogas, mientras que las ineficaces leyes y la enorme corrupción aseguran que los grandes traficantes pocas veces terminen tras las rejas. Asimismo, el modelo punitivo impulsado por la guerra contra las drogas no ha tenido como resultado la reducción del narcotráfico sino la multiplicación, concentración, especialización y diversificación organizaciones de tráfico de drogas, alimentado por la impunidad, la corrupción y la debilidad institucional de los Estados.
- **Reducir la corrupción y fortalecer las instituciones del Estado:** corrupción, junto con intimidación, es la herramienta dominante que las organizaciones de tráfico de drogas usan para infiltrarse en la vida pública. Las muchas formas en que las organizaciones criminales incapacitan o colonizan las instituciones gubernamentales van más allá de meros procedimientos administrativos. Corromper procesos electorales y políticos como la financiación de campañas, el financiamiento de medios de comunicación masivos, forzar instituciones gubernamentales para ceder sus mandatos a otras organizaciones, son mecanismos que corrompen el sistema e incapacitan a los gobiernos.
- **Poner fin a la erradicación forzosa de coca, cannabis y amapola y reemplazarlas por políticas sustentables:** algunos de los grandes problemas que enfrenta nuestra región como la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito causan daños irreparables a los agricultores y sus comunidades, aumenta la pobreza, promueve la violación de derechos humanos, la inestabilidad política y el conflicto social, y a menudo beneficia a los grupos criminales armados. Un enfoque integral debe partir de esos escenarios locales y regionales, introducir medidas para el desarrollo rural integral, modificar las estructuras concentradas de tenencia de la tierra, dar acceso a créditos y mercados para los productos alternativos, y gobernanza democrática. La apertura de mercados para productos naturales de coca, y medicinales de cannabis es una tendencia de la cual la región puede aprovechar.
- **Desarrollar políticas de drogas desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños que incluya la promoción de la salud desde una perspectiva de salud pública:** Incorporar un abanico completo y diverso de respuestas de salud pública. La atención de las distintas situaciones de consumo problemático de drogas requiere respuestas diversas, especialmente en contextos donde tal consumo se combina con pobreza extrema.
- **Suprimir las barreras de acceso de la población a medicamentos de uso controlado:** la aplicación excesivamente estricta de las convenciones internacionales de control de drogas para evitar el desvío de medicamentos controlados a mercados ilícitos resulta en limitaciones significativas al acceso a medicamentos esenciales, como los opiáceos para el alivio del dolor, particularmente en países de ingresos bajos y medianos.
- **Avanzar en la regulación del mercado de cannabis y hoja de coca partiendo de experiencias regionales:** los esfuerzos emprendidos en ejercer un control represivo sobre la producción y consumo de drogas y las políticas estatales basadas en la ilegalidad de las mismas, han tenido las consecuencias no deseadas de aumentar el consumo, la producción y la violencia vinculado a esos mercados. La regulación de la producción y acceso a sustancias consideradas actualmente ilegales, permitiría arrancar a las organizaciones criminales el monopolio que hoy tienen sobre esos mercados y que han generado violencia, corrupción y falta de acceso a los servicios sanitarios y sociales de las personas que usan drogas.
- **Reasignar los recursos destinados al control militarizado de las drogas hacia políticas integrales que coloquen en el centro al ser humano:** llevamos décadas de recursos dilapidados en respuestas bélicas que sólo han servido para multiplicar la espiral de violencia, la corrupción y la criminalidad en nuestros países. **Son necesarias respuestas estatales que promuevan la paz, el desarrollo, la atención de la salud y el respeto de los derechos humanos.**

La sociedad civil insta a los Estados a poner fin a la guerra contra las drogas y reclama un debate democrático y transparente sobre la materia que tenga en cuenta las lecciones aprendidas del pasado.